



Asamblea General

Distr. general
27 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 60º período de sesiones
(2 a 6 de mayo de 2011)**

Nº 17/2011 (Arabia Saudita)

Comunicación dirigida al Gobierno el 6 de diciembre de 2010

Relativa a: Abdulrahim Ali Abdullah Al-Murbati

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102. El mandato fue prorrogado tres años por el Consejo mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin la posibilidad de entablar un recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El caso que se menciona a continuación fue comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como sigue: Abdulrahim Ali Abdullah Al-Murbati, nacional de Bahrein, nacido el 28 de diciembre de 1960, reside habitualmente con su esposa y cinco hijos en Isa Town (Bahrein) y es un empresario que mantiene estrechas relaciones comerciales con la Arabia Saudita. El Sr. Al-Murbati tiene una segunda residencia en Medina (Arabia Saudita).

4. El 22 de agosto de 2003, el Sr. Al-Murbati fue detenido por agentes del Servicio de Investigación de la Policía de la Arabia Saudita (Al-Mabahith Al-Ammah) en su segunda residencia, en Medina.

5. La familia del Sr. Al-Murbati no consiguió información sobre su suerte y su paradero hasta diciembre de 2003. Según la fuente, la familia supo que el Sr. Al-Murbati había estado recluido en la prisión de Ruwais, cerca de Jeddah, durante tres meses y que posteriormente había sido trasladado a la prisión de Alisha, cerca de Riad, donde pudo visitarlo por primera vez.

6. Según la información recibida, durante los primeros meses de reclusión, el Sr. Al-Murbati fue presuntamente torturado y sometido a condiciones inhumanas de reclusión en régimen de aislamiento, en una celda con temperaturas muy bajas e iluminada día y noche. Fue azotado reiteradamente con cables eléctricos en las plantas de los pies y la espalda. Durante los interrogatorios, se le pidió información sobre su trabajo en una organización humanitaria que había apoyado a refugiados en el Afganistán durante la ocupación soviética en los años ochenta. La fuente señala que aunque el propio Gobierno de la Arabia Saudita respalda la labor de esa organización, las fuerzas de seguridad consideraron sospechosos los vínculos que mantenía el Sr. Al-Murbati con ella.

7. Según la información recibida de la fuente, el Sr. Al-Murbati fue trasladado en diversas ocasiones de una prisión a otra. El 6 de junio de 2008, las autoridades sauditas negaron la detención del Sr. Al-Murbati a la Embajada de Bahrein ante la Arabia Saudita, cuya intercesión había solicitado la familia del detenido. En el período que media de junio a octubre de 2008, la familia del Sr. Al-Murbati no tuvo noticia alguna sobre su suerte y paradero.

8. La fuente afirma que el Sr. Al-Murbati se encuentra actualmente recluido en la prisión de Dammam. Debido a graves problemas de salud, ha requerido tratamiento durante un mes en la unidad especial para reclusos del hospital de Dammam. Según la información recibida, el Sr. Al-Murbati ha perdido más de 50 kg desde que fue detenido, casi la mitad de su peso. En la actualidad, la familia mantiene un contacto regular con el Sr. Al-Murbati. Sin embargo, sigue experimentando dificultades financieras, ya que el Sr. Al-Murbati era su principal sostén.

9. A pesar de los esfuerzos realizados por la familia del Sr. Al-Murbati para designar a un abogado para que prepare una defensa adecuada, el Sr. Al-Murbati aún no ha tenido acceso a asistencia letrada ni ha sido puesto a disposición judicial o tenido la posibilidad de oponerse a la legalidad de la detención.

10. La fuente añade que, de agosto a diciembre de 2003 y de junio a octubre de 2008, el Sr. Al-Murbati estuvo en paradero desconocido; fue detenido sin una orden judicial y durante los siete años de privación de libertad no se le ha informado nunca de las acusaciones que se le imputan. La fuente alega que estos hechos constituyen una violación del derecho de la Arabia Saudita, en especial del artículo 36 de la Ley fundamental de gobernanza, que dice: "[e]l Estado velará por la seguridad de todos los ciudadanos y de todas las personas que residan en su territorio. Nadie será recluido, detenido o encarcelado sino en los casos y la forma que las leyes prescriban". Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto N° M/39, de 16 de octubre de 2001) establece: "[t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente". Ese artículo especifica asimismo que: "se informará también a la persona detenida de las razones de su detención", lo cual no ha sucedido en el caso del Sr. Al-Murbati.

11. Según la información recibida, el Sr. Al-Murbati no ha sido juzgado ni se le ha informado de cuánto tiempo permanecerá detenido, lo cual conculca el derecho interno de la Arabia Saudita. En particular, el artículo 3 de la Ley de procedimiento penal establece que "no se impondrán sanciones penales a ninguna persona, salvo en relación con un acto prohibido y punible (...) y una vez que haya condena firme tras la celebración de un juicio conforme a los principios de la *sharia*". Además, el artículo 2 de la Ley de procedimiento penal estipula que "la duración de la detención (...) será fijada por la autoridad competente".

12. La fuente sostiene también que, según el artículo 114 de la Ley de procedimiento penal, el periodo de prisión preventiva no puede superar los cinco días, con posibilidad de ser prolongado hasta un total de seis meses. En consecuencia, el Sr. Al-Murbati debe "comparecer inmediatamente ante el tribunal competente o (...) ser puesto en libertad".

13. Por otra parte, la fuente señala que la detención del Sr. Al-Murbati vulnera los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Sr. Al-Murbati no ha podido oponerse a la legalidad de la detención ante un juez o tribunal competente ni ha tenido acceso a un abogado.

Respuesta del Gobierno

14. El Grupo de Trabajo envió una comunicación al Gobierno el 6 de diciembre de 2010 y lamenta que no se haya recibido una respuesta en el plazo establecido de 90 días. El Gobierno tampoco ha solicitado al Grupo de Trabajo una ampliación del plazo, de conformidad con los párrafos 15 y 16 de sus métodos de trabajo.

Deliberaciones

15. Pese a que no ha recibido una respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que, sobre la base de la información de que dispone, está en condiciones de emitir una opinión sobre la detención y privación de libertad del Sr. Al-Murbati, de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo.

16. Los hechos expuestos por la fuente sobre los que, lamentablemente, no se ha recibido una respuesta del Gobierno ponen de manifiesto un cuadro persistente de violaciones de diversos derechos humanos, como el derecho a no ser detenido sin una orden judicial, a comparecer ante un juez en un plazo determinado, a ser informado de las acusaciones imputadas, a la asistencia de un abogado y a un juicio imparcial en un plazo razonable. Además, en el presente caso, cabe añadir la vulneración de otro derecho durante

la reclusión, al no permitirse el contacto con la familia a lo largo de dos períodos en los siete años de reclusión (entre agosto y diciembre de 2003 y, posteriormente, entre junio y octubre de 2008). De la información recibida se deduce que, en el caso del Sr. Al-Murbati, no se han respetado los derechos mencionados y que sigue en una situación prolongada de privación de libertad, agravada por problemas de salud y sin conocer las razones de la privación de libertad ni su duración.

17. También procede recordar al Gobierno de la Arabia Saudita que existen unos principios fundamentales mínimos aplicables al trato de los reclusos, como el derecho a no ser maltratado, torturado o recluido en régimen de aislamiento en una celda helada, así como el derecho a asistencia médica en caso de enfermedad.

18. El Grupo de Trabajo toma nota con preocupación de que la prolongada reclusión del Sr. Al-Murbati y la presunta tortura de que ha sido objeto han deteriorado su estado de salud y puesto en peligro no solo su salud y bienestar, sino también su vida. Con este fin, el Grupo de Trabajo recuerda su opinión N° 25/2007 (Australia), relativa a las condiciones de salud de los detenidos. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno de la Arabia Saudita las obligaciones jurídicas que le incumben como Estado parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Grupo de Trabajo recuerda también los principios 11, párrafo 1, y 32 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobado por la Asamblea General (resolución 43/173, anexo, de 9 de diciembre de 1988).

19. El Grupo de Trabajo observa que esta situación no constituye un caso aislado. Como se ha señalado en opiniones anteriores del Grupo de Trabajo, en particular en las opiniones N° 36/2008, N° 37/2008, N° 22/2008, N° 21/2009, N° 2/2011, N° 10/2011 y N° 11/2011, un número considerable de personas han sido detenidas y privadas de libertad sin que mediara una orden judicial, sin comparecer oportunamente ante un juez y sin acceso a un abogado ni a la celebración de un juicio. Se ha afirmado que el principal propósito de los interrogatorios y la tortura del Sr. Al-Murbati era obtener información acerca de su relación con una organización humanitaria. Ahora bien, si hubiera habido sospechas de que el Sr. Al-Murbati tenía vínculos ilegales, el Gobierno habría podido inculparlo y juzgarlo en el respeto de las debidas garantías procesales, en lugar de mantenerlo recluido indefinidamente. Una privación de libertad tan prolongada y sin perspectivas de medidas correctivas es inaceptable de conformidad con el derecho nacional o internacional.

Decisión

20. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Al-Murbati es arbitraria por cuanto se inscribe en las categorías I y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo, carece de fundamento jurídico y contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

21. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la Arabia Saudita que proceda a la inmediata puesta en libertad del Sr. Al-Murbati y ajuste su situación a las normas y principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

22. En particular, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a prestar atención urgentemente al estado de salud del Sr. Al-Murbati y proporcionarle una asistencia médica adecuada.

23. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que proporcione una reparación adecuada al Sr. Al-Murbati y su familia.

24. El Grupo de Trabajo invita al Gobierno de la Arabia Saudita a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobada el 5 de mayo de 2011.]
